

Resumen Ejecutivo



Finanzas sostenibles y transiciones justas:
avances y retrocesos hacia economías bajas en carbono y resiliente al clima en América Latina y el Caribe



GRUPO DE
FINANCIAMIENTO
CLIMÁTICO
LAC



Finanzas
Sostenibles
para el Futuro



Índice
de Finanzas
Sostenibles



Hub
de Finanzas
Sostenibles



Climate
and Sustainable
Finances Dialogues

Autores:

Dra. Sandra Guzmán

Fundadora y Directora General, GFLAC

Mtro. Orlando Barbosa

Asociado en Finanzas Climáticas Públicas, GFLAC

Mtro. Diego Escalante

Asociado en Finanzas Públicas para América del Sur,
GFLAC

Mtra. Alejandra García

Asociada en Finanzas Climáticas para América Central,
GFLAC

Lic. Luz Andina Parrado

Asociada en Creación y Fortalecimiento de Capacidades,
GFLAC

Estrategia de comunicación:

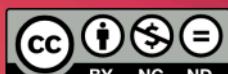
Lic. Federika Logwinczuk, GFLAC

Asociada en Comunicación de Estratégica Institucional

Diseño:

Lic. Jhon Cortés, GFLAC

Asociado en Diseño Creativo



Esta publicación está licenciada bajo la Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
No es una licencia de Cultura Libre.

Cita requerida:

Los lectores pueden reproducir total o parcialmente este documento siempre
que se cite la fuente de la siguiente manera:
Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).
(2025). *Resumen Ejecutivo. Índice de Finanzas Sostenibles 2025 (con datos a
2024). Finanzas sostenibles y transiciones justas: avances y retrocesos hacia
economías bajas en carbono y resiliente al clima en América Latina y el Caribe.*
Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).



Introducción

El mundo se encuentra en un punto de inflexión decisivo frente a la crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad. Según el informe Global Tipping Points 2025, el planeta ha alcanzado umbrales ecológicos que podrían marcar un punto de no retorno de los sistemas climáticos y naturales. Estos hallazgos confirman la urgencia de transformar modelos de desarrollo actuales, que continúan impulsando actividades intensivas en carbono y presionan los límites planetarios. En este contexto, América Latina y el Caribe - una de las regiones más biodiversas del mundo, pero también altamente vulnerables a los impactos climáticos - enfrentan el desafío de redefinir su arquitectura financiera y fiscal para sostener un desarrollo verdaderamente sostenible y resiliente.

La **canalización de recursos financieros** hacia la acción climática y la protección de la biodiversidad no solo debe centrarse en **incrementar los montos disponibles**, sino también en **asegurar la calidad, coherencia y transparencia** de dichos flujos. En vísperas de la **COP30**, los países se preparan para acordar el nuevo **paquete global de financiamiento**, que incluirá la **Hoja de Ruta de Bakú a Belem (B2B)**, la **Meta Global de Adaptación (GGA)** y la actualización de las **Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)**. Estos procesos definirán el marco financiero internacional para la próxima década y demandan mecanismos de **trazabilidad y rendición de cuentas** que garanticen que cada dólar invertido contribuya efectivamente a reducir emisiones, fortalecer la resiliencia y conservar los ecosistemas.

En este escenario, el **Índice de Finanzas Sostenibles (IFS)** desarrollado por el **Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC)**, se consolida como una herramienta técnica clave **monitorear y evaluar los flujos financieros** orientados a la mitigación, adaptación, biodiversidad y otros componentes de la sostenibilidad. Su



aplicación permite identificar patrones de asignación de recursos, medir el grado de dependencia de las economías nacionales respecto a fuentes intensivas en carbono y generar evidencia empírica para fortalecer la transparencia, la planeación fiscal y la coherencia de las políticas públicas.

El IFS no solo se alinea al mandato del **Artículo 2.1.c del Acuerdo de París** que llama a “hacer coherentes los flujos financieros con una trayectoria hacia un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resilientes al clima”, sino que también proporciona una base analítica robusta para evaluar el grado de alineación de los sistemas financieros nacionales con los compromisos climáticos. En el contexto posterior a la **COP30**, donde la implementación y rendición de cuentas serán determinantes, herramientas como el IFS adquieren un papel central para orientar decisiones basadas en evidencia, optimizar la asignación de recursos públicos y privados y acelerar la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima.

En su **edición 2025**, el IFS incorpora **nuevos componentes en la variable de presupuestos sostenibles**, incluyendo **la conservación de océanos y transporte sostenible**, ampliando así el alcance del análisis sobre los esfuerzos de los gobiernos nacionales para integrar la sostenibilidad en la gestión pública. Los resultados de esta edición evidencian avances moderados, aunque aún insuficientes: **los ingresos por actividades intensivas en carbono superan en 11 veces a los ingresos sostenibles, y los presupuestos destinados a sectores con alto impacto ambiental son 5 veces mayores que aquellos dirigidos a la acción climática**.

Si bien estas brechas muestran una ligera mejora con respecto a la edición 2024, reflejan la persistente dependencia estructural de la región respecto a economías basadas en combustibles fósiles. Este panorama reafirma la necesidad de **reorientar los flujos financieros públicos y privados hacia la sostenibilidad**, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la planificación basada en evidencia.

En cuanto al desempeño general, los resultados del **IFS 2025 destacan a Panamá** como el país mejor posicionado, al **alcanzar 3.5 de un máximo de 4.0 puntos**, correspondiente al nivel de desempeño **“Muy Alto”**, debido a su alta captación de financiamiento internacional climático y su baja exposición a fuentes intensivas en carbono. En contraste, **Cuba y Trinidad y Tobago** se mantienen en el nivel **“Bajo”**. No obstante, un resultado relevante de esta edición es que ningún país se ubica en el nivel **“Muy Bajo”** de finanzas sostenibles.

El **IFS** continúa en un proceso de mejora metodológica permanente, orientado a fortalecer la calidad, consistencia y comparabilidad de la información. Sus resultados buscan apoyar a los gobiernos nacionales en la construcción de **finanzas más sostenibles, transparentes y alineadas con los compromisos climáticos internacionales**. Cualquier sugerencia o aporte que contribuya a fortalecer su marco conceptual será altamente valorado.

Para comentarios, consultas o colaboraciones puede contactarse a través del correo: finanzassostenibles@gflac.org

Principales Hallazgos

Contexto regional

América Latina y el Caribe atraviesan un momento decisivo frente a la crisis interconectada del **cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad estructural**. La región ha sido catalogada por el *IPCC*¹ y el *Global Tipping Points 2025*² como uno de los territorios más expuestos a los efectos de los puntos de inflexión climáticos, debido a su alta dependencia de los ecosistemas naturales, su vulnerabilidad social y su limitada resiliencia fiscal.

En los últimos años, los **eventos climáticos extremos** han aumentado en frecuencia e intensidad: entre 1998 y 2020, más de **312 millones de personas** en la región fueron afectadas por desastres asociados al clima - sequías prolongadas, huracanes, incendios forestales e inundaciones - generando pérdidas económicas estimadas anuales por desastres que ascienden los 58 mil millones de dólares (OMM, 2021³, UNDRR, 2025⁴).

Paralelamente, la **pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas** se han acelerado: más del **55% de los ecosistemas terrestres y marinos** de la región muestran signos de alteración severa, con un retroceso de más del **40% de las poblaciones de especies vertebradas** en los últimos 50 años (CDB, 2019⁵). Esta degradación amenaza directamente los medios de vida de las comunidades rurales e indígenas y compromete servicios ecosistémicos esenciales para la regulación climática.

El impacto humano de esta crisis se refleja también en el aumento de la **migración climática**. De acuerdo con el Banco Mundial (2021⁶), si las tendencias actuales continúan, **más de 17 millones de personas** podrían verse forzadas a desplazarse internamente en América Latina y el Caribe hacia 2050 por razones relacionadas con el clima. Este fenómeno plantea desafíos en materia de gobernanza, infraestructura y cohesión social, especialmente en zonas urbanas vulnerables.

Asimismo, la región continúa mostrando una **alta vulnerabilidad económica** ante estos impactos. En 2022, América Latina y el Caribe generaron **4,101 millones de toneladas de CO₂ equivalente**, el **8.18% de las emisiones globales**, cifra modesta frente a regiones

¹ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2025). *Intergovernmental Panel on Climate Change*. Recuperado de [IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change](#)

² Global Tipping Points (2025). *Global Tipping Points Report*. Recuperado de [Global Tipping Points | understanding risks & their potential impact](#)

³ Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2021). El estado del clima en América Latina y el Caribe 2020. Recuperado de [El estado del clima en América Latina y el Caribe 2020](#)

⁴ Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) (2025). RAR24: La falta de inversión en prevención de desastres pone en riesgo el futuro de América Latina y el Caribe. Recuperado de: [Falta de inversión en RRD pone en riesgo América Latina y el Caribe | UNDRR](#)

⁵ Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB). (2019). *The State of Biodiversity in Latin America and the Caribbean - Full Report Book*. Recuperado de [post2020-ws-2019-05-presentation-2018_americas_full_report_book_v5_pages_0-en.pdf](#)

⁶ Banco Mundial (BM). (2021). *Climate Change Could Force 216 Million People to Migrate Within Their Own Countries by 2050*. Recuperado de [Groundswell Report](#)

industrializadas pero significativas si se considera el alto nivel de exposición ambiental (ClimateWatch - Historial emissions GEI, 2025⁷). A pesar de representar una fracción de la emisiones mundiales, la región concentra una proporción desmedida de los daños económicos y sociales derivados del cambio climático.

Económicamente, la región aportó en 2024 el **6.57% del PIB global**, con una tasa de crecimiento promedio de **1.4%**, inferior al promedio mundial (Banco Mundial, 2024⁸). Esta desaceleración refleja **limitaciones estructurales persistentes**: baja diversificación productiva, alta informalidad laboral y escasa inversión en innovación sostenible. El **desempleo promedio (6.2%)** (Banco Mundial, 2024⁹) y la elevada **informalidad** siguen afectando la estabilidad fiscal, mientras que el **6.4% de la población** permanece en situación de vulnerabilidad multidimensional (PNUD, 2024¹⁰).

Estas condiciones evidencian que **América Latina y el Caribe no están financieramente preparadas para enfrentar las consecuencias del cambio climático**, lo que podría **profundizar las brechas sociales, exacerbar la pobreza e incrementar la migración climática**. La falta de planeación fiscal y presupuestaria alineada a la acción climática limita la capacidad de los Estados para responder de manera preventiva y equitativa.

Financiamiento climático para la región de América Latina y el Caribe

En 2023, **América Latina y el Caribe recibió 17.9 mil millones de dólares en financiamiento climático y biodiversidad** de acuerdo con estimaciones de la GFLAC con base a fuentes de datos de la OCDE. Este monto significa un incremento importante de 65.03% con relación a datos de 2021, donde el financiamiento fue de 10.9 mil millones de dólares. Si bien estos datos son positivos para la edición de este año, una visión más desagregada muestra que todavía la distribución no es homogénea, otorgando menos recursos a ciertos objetivos de política climática. En el caso de **biodiversidad, la región recibió 817 millones de dólares**, lo que representa el **4.54% del financiamiento total**. Este es un monto significativamente bajo, con relación a otras variables de política climática, teniendo además en consideración la importancia en conservación de biodiversidad que debería darle a la región.

Para el caso de **adaptación, el monto total destinado fue de 5.3 millones de dólares**, lo que representa el **29.5%**. Mientras que, para el caso de **mitigación la región recibió 11.8 millones de dólares**, que representa el **65.8%**. Si bien, la mitigación es importante para reducir las emisiones de CO₂, aumentar los recursos en adaptación es fundamental porque la región de América Latina y el Caribe debe construir la capacidad de resiliencia y adaptar su estructura para hacerle frente a las adversidades del cambio climático.

⁷ Climate Watch. (2025). "Greenhouse Gas (GHG) Emissions," Climate Watch Data. Recuperado de [World | Total including LUCF | Greenhouse Gas \(GHG\) Emissions | Climate Watch](#)

⁸ Banco Mundial. (2025). *Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina y el Caribe*. Recuperado de [PIB \(US\\$ a precios actuales\) - Latin America & Caribbean | Data](#)

⁹ Banco Mundial. (2025). Tasa de desempleo total (% de la fuerza laboral total). Recuperado de [Desempleo, total \(% de la fuerza laboral total\) \(estimación modelada de la OIT\) | Data](#)

¹⁰ PNUD. (2024). *Índice de Pobreza Multidimensional Global (IPM) 2024*. Disponible en [2024 Global Multidimensional Poverty Index \(MPI\) | Human Development Reports](#)

Los bancos multilaterales (MDBs por sus siglas en inglés) representan una fuente importante de financiamiento. En el caso de América Latina y el Caribe, en 2023 **la región recibió 3.3 mil millones en cambio climático y biodiversidad** con base a estimaciones realizadas por la GFLAC y datos de la OCDE. De este financiamiento, se destinaron 2.3 mil millones en mitigación, mientras que 250 millones de dólares se destinaron a adaptación y 742 millones a biodiversidad. Las inversiones en adaptación se concentraron en energía, transporte e infraestructura, así como en recursos agrícolas y ecológicos. Por su parte, los fondos destinados a mitigación se enfocaron principalmente en el sector energético, edificaciones y eficiencia energética (African Development Bank, et al., 2024¹¹).

Índice de Finanzas Sostenibles

Los resultados del **Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2025** revelan que América Latina y el Caribe registran **avances moderados pero todavía insuficientes en el saneamiento de sus finanzas públicas**. Aunque algunos países muestran señales positivas en la movilización y asignación de recursos hacia sectores ambientales y climáticos, la región continúa caracterizándose por una **profunda dependencia de actividades intensivas en carbono**. Esta situación no solo restringe la capacidad de los países para transitar hacia **economías bajas en carbono y resilientes al clima**, sino que también compromete su estabilidad macroeconómica ante la creciente exposición a los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

A nivel regional, el IFS 2025 evidencia una **asimetría estructural persistente en los flujos financieros públicos**. Los **ingresos intensivos en carbono superan en 11 veces a los ingresos sostenibles**, mientras que los **presupuestos intensivos en carbono son 5 veces mayores a los presupuestos sostenibles**. En términos absolutos, los 20 países analizados generaron alrededor de **199.5 mil millones de dólares por actividades extractivas**, frente a sólo **17.9 mil millones de dólares provenientes de ingresos sostenibles**. En el gasto público, los gobiernos destinaron **71.3 mil millones de dólares a sectores intensivos en carbono**, en comparación con **13.1 mil millones de dólares asignados a actividades sostenibles**.

Estas cifras presentan una **incongruencia entre los compromisos climáticos asumidos y la ejecución fiscal real**, lo que resalta la necesidad urgente de reorientar los presupuestos nacionales y locales hacia la acción climática, la protección de ecosistemas y la reducción de vulnerabilidades. Este hallazgo es particularmente relevante en el contexto del **paquete financiero que se discutirá en la COP30**, el cual busca fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas en el uso de los recursos destinados a la adaptación, mitigación y conservación.

¹¹ African Development Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Council of Europe Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, Inter American Development Bank, IDB Invest, Islamic Development Bank, New Development Bank, & World Bank (2024). 2023 Joint Report on Multilateral Development Banks Climate Finance. Disponible en <https://doi.org/10.18235/0013160>

Entre los principales resultados, **Panamá** se posiciona como el país con el **mayor desempeño regional**, alcanzando una puntuación de **3.5 sobre 4.0 puntos**, correspondiente al nivel “**Muy Alto**”. Esto se explica por un **bajo nivel de dependencia de fuentes intensivas en carbono** - menos del 2% de sus ingresos y 0.1% de su gasto - y por su **alto acceso a financiamiento internacional para la biodiversidad y el cambio climático**, que representa más del 40% del total recibido para el desarrollo.

En contraste, **Cuba y Trinidad y Tobago** se mantienen en el nivel de desempeño “**Bajo**”, con una **puntuación de 1.0**, debido a su **alta exposición a ingresos fósiles y a la limitada disponibilidad de información fiscal y ambiental**. Sin embargo, ambos países muestran una ligera mejora frente a la edición anterior, al incrementar su proporción de presupuesto sostenible.

Por su parte, **República Dominicana** destaca como el **principal receptor de ingresos sostenibles**, con **1.4 mil millones de dólares** destinados a la biodiversidad y cambio climático, equivalentes al **49.4% de su financiamiento total para el desarrollo**. Le siguen **Panamá (41.4%) y Cuba (37.3%)**, ambos clasificados en el nivel “**Alto**”. Estos resultados muestran que, pese a las limitaciones estructurales, algunos países de la región están logrando **canalizar recursos con mayor coherencia hacia objetivos de sostenibilidad**.

En el otro extremo, **Ecuador** se consolida como el país **más dependiente de fuentes intensivas en carbono**, con un **35.2% de sus ingresos** provenientes de estas actividades, seguido de **México (28.6%)**, **Trinidad y Tobago (14.6%)** y **Perú (14.3%)**. Este patrón reafirma la persistencia de un modelo económico **basado en la extracción de combustibles fósiles y actividades contaminantes**, que obstaculizan la transición energética y amplía las brechas de vulnerabilidad climática.

En cuanto al gasto público, la región destina en promedio **menos del 1% del presupuesto a sectores sostenibles**. **El Salvador** sobresale al asignar **casi el 5% de su presupuesto a actividades sostenibles**, alcanzando el nivel “**Alto**”. En contraste, **Bolivia y Costa Rica** son los países con **mayor proporción del gasto público orientado a sectores intensivos en carbono**, destinando **15.91% y 15.32%**, respectivamente, a actividades con alto impacto ambiental.

En conjunto, los resultados del IFS 2025 muestran avances puntuales en diversos países, impulsados en algunos casos por el financiamiento internacional y en otros por esfuerzos nacionales de reasignación presupuestaria. No obstante, la región en su conjunto enfrenta desafíos estructurales: la dependencia de flujos externos, la persistencia de ingresos ligados a sectores intensivos en carbono y la débil capacidad institucional para orientar las finanzas hacia la sostenibilidad de manera consistente.

Estos elementos evidencia que, aunque se registran progresos, la región aún tiene por delante un largo camino hacia una transformación fiscal y financiera capaz de sostener la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima, que permita cumplir con el **Artículo 2.1.c del Acuerdo de París**, respecto a hacer los flujos de financiamiento consistentes con el desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima.



Índice de Finanzas Sostenibles

El **Índice de Finanzas Sostenibles (IFS)** es una herramienta desarrollada por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), aplicada de manera anual. Su propósito es **monitorear los ingresos y egresos nacionales e internacionales relacionados con el cambio climático y el desarrollo sostenible**, así como identificar los **recursos que aún se destinan a actividades que obstaculizan la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima**, particularmente aquellos vinculados a la extracción y producción de combustibles fósiles y la minería.

El IFS se aplica a los 20 países con mayores emisiones de gases contaminantes en América Latina y el Caribe (ALC) y se calcula a partir de cuatro variables que integran distintos rubros de las finanzas públicas nacionales e internacionales:

- **Ingresos Sostenibles (IS):** Incluyen el financiamiento internacional para el desarrollo, con énfasis en los recursos bilaterales y multilaterales destinados a biodiversidad y cambio climático, expresados como proporción del financiamiento para el desarrollo.
- **Ingresos Intensivos en Carbono (IIC):** Comprenden los ingresos provenientes de la exploración, explotación de hidrocarburos, minerales y combustibles fósiles, medidos en relación con el ingreso total.
- **Presupuestos Sostenibles (PS):** Corresponde al gasto público asignado a biodiversidad, cambio climático, energías renovables, eficiencia energética, gestión forestal, transporte sostenible, conservación de océanos y atención de desastres naturales, como proporción del gasto total.
- **Presupuesto Intensivo en Carbono (PIC):** Engloban los recursos destinados a actividades relacionadas con hidrocarburos y procesos industriales contaminantes, como el financiamiento a empresas estatales de petróleo y gas, expresados como proporción del gasto total.

La metodología del IFS se sustenta en un análisis comparativo de ingresos y egresos, distinguiendo entre aquellos que favorecen la transición sostenible y los que refuerzan la dependencia de sectores intensivos en carbono. Cada variable recibe una valoración entre 0 y 1 puntos. En este esquema, los ingresos y presupuestos sostenibles se consideran variables positivas, por lo que los países que destinan mayores recursos a estos sectores obtienen puntuaciones cercanas a 1 punto. Por el contrario, los ingresos y presupuestos intensivos en carbono se consideran variables negativas, de modo que los países que concentran una mayor proporción de recursos en estos sectores alcanzan puntuaciones más próximas a 0 puntos.

La calificación final es la suma de las cuatro variables, por lo que oscila entre 0 y 4 puntos. Con base en este resultado, los países se clasifican en siete niveles de finanzas sostenibles: **Muy Alto** (3.5 a 4.0 puntos), **Alto** (2.9 a 3.4), **Medio Alto** (2.3 a 2.8), **Medio** (1.8 a 2.2), **Medio Bajo** (1.2 a 1.7), **Bajo** (0.6 a 1.1) y **Muy Bajo** (0.0 a 0.5).



La importancia metodológica del IFS radica en su capacidad para ofrecer una clasificación comparativa que refleja el equilibrio entre los recursos orientados a la sostenibilidad y aquellos dirigidos a sectores con alta intensidad de carbono. Esto no solo permite identificar tendencias regionales, sino también evidenciar brechas específicas en la asignación de recursos y en la dependencia estructural de las economías extractivas.

El carácter dinámico del índice, actualizado de manera anual con datos oficiales y de acceso público, lo convierte en una herramienta estratégica para dar seguimiento continuo a los avances y retrocesos en materia de financiamiento climático. Esta periodicidad garantiza que los resultados puedan ser utilizados para fortalecer el diseño de políticas públicas, la planificación fiscal y presupuestaria, así como la movilización de recursos hacia la acción climática.

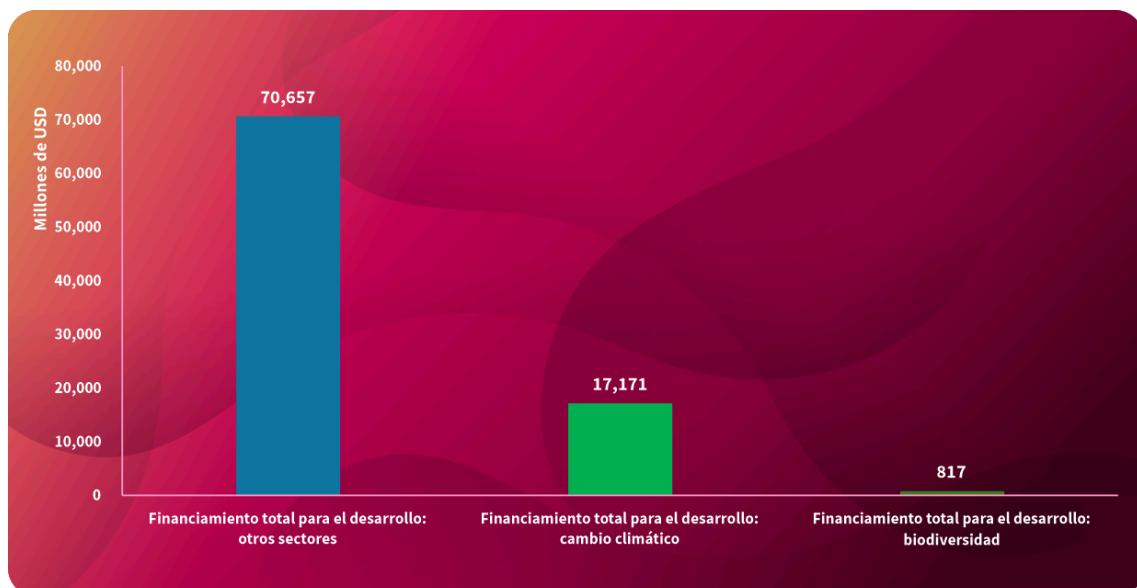
En definitiva, el IFS constituye un puente metodológico entre los compromisos internacionales y realidades nacionales. Al visibilizar simultáneamente los recursos que apoyan la transición sostenible y aquellos que la limitan, el índice no sólo cuantifica los flujos financieros, sino que también aporta información crítica sobre el espacio fiscal disponible para impulsar la acción climática, consolidándose como un instrumento clave para avanzar en la transformación fiscal, presupuestaria y ambiental de la región.

Indicadores de financiamiento y cooperación internacional

El análisis de los flujos de financiamiento internacional en América Latina y el Caribe (ALC) es clave para entender cómo la región enfrenta los desafíos de la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad y la transición hacia modelos de desarrollo sostenibles. Estos recursos no solo determinan la capacidad de los países para implementar políticas ambientales y climáticas, sino que también revelan las condiciones bajo las cuales se accede al financiamiento - ya sea en forma de préstamos o subvenciones - lo que influye directamente en la sostenibilidad fiscal y la autonomía económica de los países.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2023), ALC recibió un total de **70.6 mil millones de dólares en financiamiento para el desarrollo**, de los cuales **17.9 mil millones de dólares (25.45%)** se destinaron específicamente a iniciativas relacionadas con el cambio climático y la biodiversidad. De este monto, **17.1 mil millones** se canalizaron a **acciones climáticas y 817 millones** hacia la **protección de la biodiversidad**.

Gráfica 1. Financiamiento internacional destinado a la biodiversidad y el cambio climático con respecto al total del financiamiento para el desarrollo en 2023



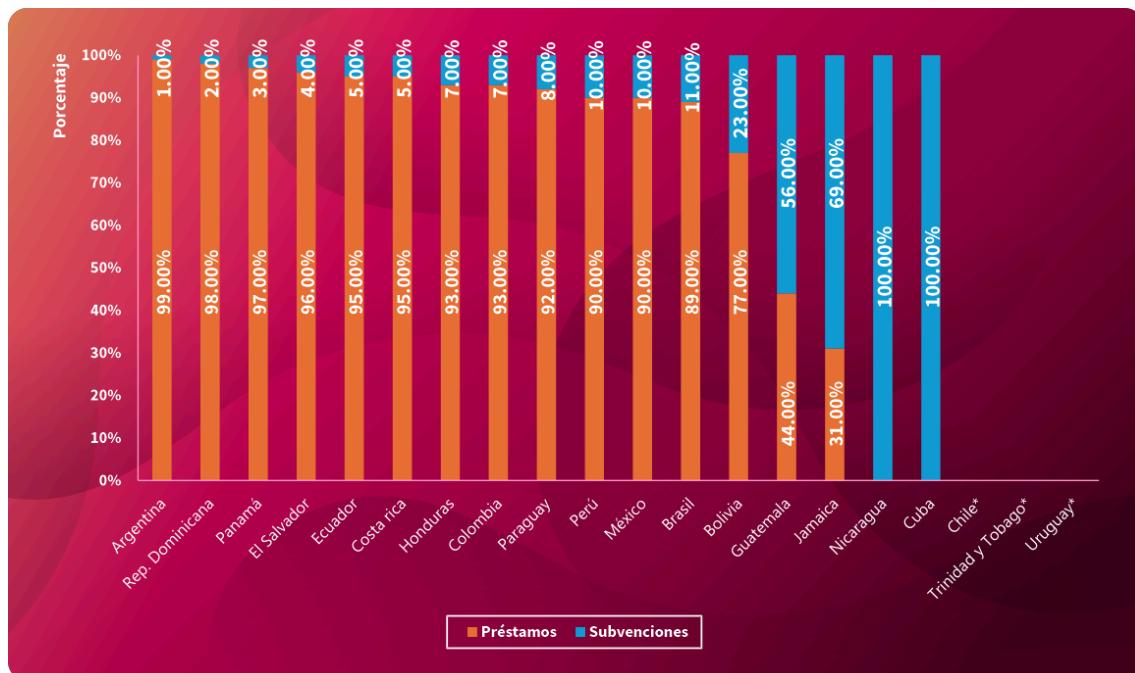
Fuente. Elaboración propia con base en datos de la OCDE, consultadas en 2025 y correspondientes al año 2023.

Estos resultados reflejan que, aunque el financiamiento internacional se ha convertido en un instrumento esencial para impulsar la sostenibilidad fiscal y ambiental, **su distribución sigue siendo desigual y predominantemente orientada a la mitigación**. En efecto, del total de los recursos climáticos, el **65.82% (11.8 mil millones de dólares)** se dirigió a **acciones de mitigación**, mientras que solo el **29.64% (5.3 millones de dólares)** se destinó a **adaptación**. Esta tendencia muestra una brecha estructural: la región continúa priorizando la reducción de emisiones sobre el fortalecimiento de su resiliencia frente a los impactos del cambio climático, a pesar de ser una de las zonas más vulnerables del mundo.

Un elemento constantemente identificado a lo largo de las ediciones del IFS es la **alta dependencia de préstamos como principal fuente de financiamiento internacional**. Entre 2021 y 2023, la proporción de préstamos apenas varió, pasando de **92.6% a 92.1%**, lo que evidencia una persistente limitación en el acceso a recursos no reembolsables. Esta situación genera **presiones fiscales adicionales** sobre países con márgenes fiscales ya restringidos, dificultando la inversión sostenida en adaptación, restauración ecosistémica o transición energética.

No obstante, algunos países destacan por haber logrado acceder a mayores proporciones de **subvenciones: Cuba (100%), Nicaragua (100%), Jamaica (69%) y Guatemala (56%)**. Este tipo de financiamiento representa un apoyo más sostenible, al no incrementar el endeudamiento público y al permitir una mayor flexibilidad en la implementación de políticas climáticas y ambientales. En contraste, países como **Argentina (99%) y República Dominicana (98%)** dependen casi totalmente de préstamos, lo que incrementa sus riesgos de sobreendeudamiento y reduce su capacidad para orientar sus presupuestos hacia objetivos de sostenibilidad.

Gráfica 2. Distribución del financiamiento destinado a biodiversidad y cambio climático por tipo de instrumento: préstamos y subvenciones en porcentaje en 2023



Fuente. Elaboración propia con base en datos de la OCDE, consultadas en 2025 y correspondientes al año 2023.

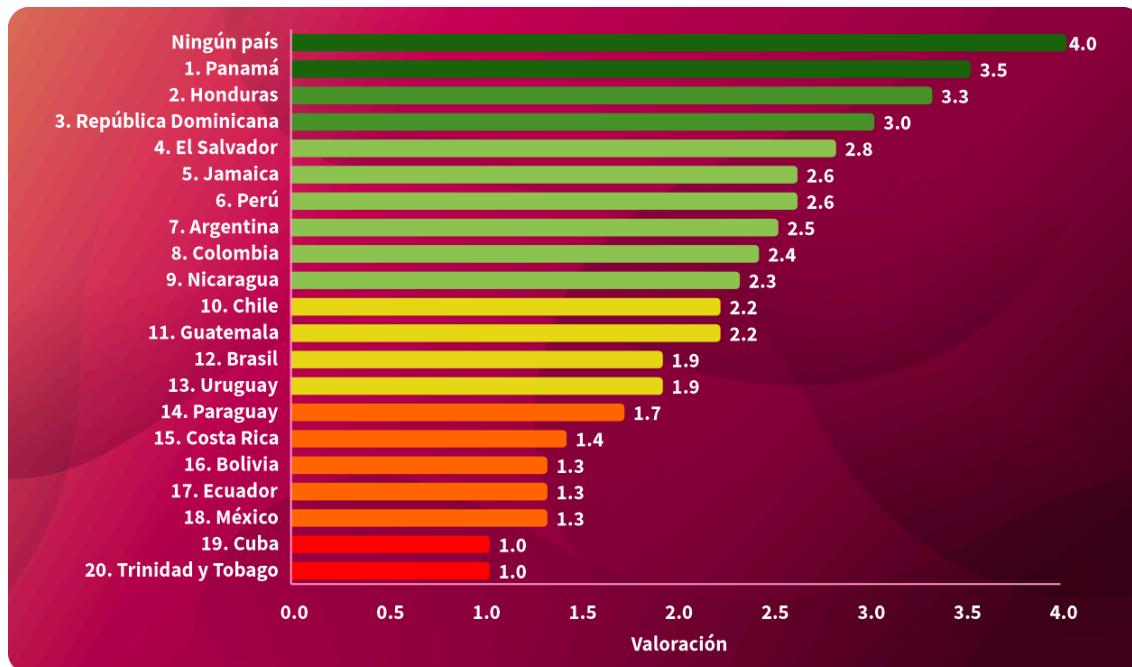
En conjunto, estos resultados reafirman que la calidad del financiamiento es tan importante como su cantidad. Para los países de América Latina y el Caribe, fortalecer el acceso a recursos concesionales, mejorar la transparencia en su uso y asegurar una distribución equilibrada entre mitigación y adaptación son pasos fundamentales para garantizar una transición justa, fiscalmente sostenible y alienada con los compromisos globales asumidos rumbo a la COP30.

Resultados del Índice de Finanzas Sostenibles 2025

El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2025, elaborado con información actualizada a 2024, evidencia una ligera mejora en la valoración de la mayoría de los países analizados. No obstante, este avance debe interpretarse con cautela, ya que no refleja un cambio estructural significativo en la orientación de las finanzas hacia la sostenibilidad. En gran medida, la mejora observada se explica por la incorporación de nuevos componentes dentro de la variable de Presupuestos Sostenibles, particularmente aquellos relacionados con la conservación de los océanos y el transporte sostenible.

Asimismo, en esta edición ningún país se ubicó en el nivel “**Muy Bajo**” de desempeño en finanzas sostenibles, lo que representa un progreso relativo respecto a años anteriores. Sin embargo, estos resultados responden más a los ajustes metodológicos introducidos en el índice que a transformaciones sustantivas en las políticas fiscales y financieras de los países de la región.

Gráfica 3. Ranking de Finanzas Sostenibles 2025



Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 analizados, correspondientes al año 2024.

En esta edición, Panamá logró posicionarse como el primer país de estudio en alcanzar el nivel de desempeño “**Muy Alto**” en finanzas sostenibles, con una puntuación de 3.5 sobre un máximo de 4.0 puntos. Este resultado se explica por varios factores: primero, Panamá fue el segundo mayor receptor de financiamiento para el desarrollo en materia de biodiversidad y cambio climático, con más del 40% del total; segundo, destinó aproximadamente el 2.0% de su presupuesto nacional a sectores vinculados con la acción climática, lo que lo ubicó como el tercer país con mayor esfuerzo en este rubro; y tercero, su dependencia de actividades intensivas en carbono fue limitada, al representar menos del 2.0% de sus ingresos y menos del 0.10% de su gasto. El caso de Panamá muestra que la combinación de un acceso sustantivo a recursos internacionales, una asignación presupuestaria significativa a sectores sostenibles y una estructura económica menos dependiente de actividades extractivas constituye un medio para alcanzar un desempeño alto en finanzas sostenibles.

En el nivel “**Alto**” se posicionan Honduras (3.3) y República Dominicana (3.0). Ambos países mostraron una mejora considerable respecto a la edición anterior: Honduras pasó de 2.5 a 3.3 puntos y República Dominicana de 2.4 a 3.0 puntos. Esto se explica, principalmente, por el importante flujo de financiamiento internacional recibido: República Dominicana concentró cerca del 50% del total destinado a biodiversidad y cambio climático, mientras que Honduras obtuvo aproximadamente el 35%. Además, ambos países asignaron menos del 1.0% de su gasto a actividades intensivas en carbono.

Aunque los resultados reflejan una mejora sustantiva, la fuerte dependencia de flujos externos plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de estos avances a largo plazo, dado que dependen más de la continuidad y estabilidad del financiamiento internacional que de cambios estructurales en las políticas fiscales nacionales.



A nivel regional, los datos indican que el 92.1% del financiamiento provino de préstamos, mientras que apenas el 7.9% correspondió a subvenciones, lo que evidencia una persistencia en el patrón de financiamiento. Cabe señalar que en la edición anterior la proporción de subvenciones fue prácticamente idéntica (7.4%), reflejando una limitada diversificación en las fuentes de financiamiento disponibles para la acción climática y la sostenibilidad.

El nivel “**Medio Alto**” fue el más representativo en la edición 2025, con países como El Salvador (2.8), Jamaica y Perú (2.6), Argentina (2.5), Colombia (2.4) y Nicaragua (2.3). Entre ellos destacan Perú y El Salvador por los avances registrados respecto a la edición anterior.

En el caso de Perú, su puntuación se incrementó de 2.1 a 2.6 puntos, impulsada por la asignación de cerca del 3% de su presupuesto total a sectores sostenibles y por la reducción del gasto en actividades intensivas en carbono a menos del 1%. El Salvador, por su parte, mejoró de 2.4 a 2.8 puntos, convirtiéndose en el país con la mayor proporción de recursos destinados a presupuestos sostenibles, con más del 4% de su presupuesto total orientado a este tipo de actividades.

Si bien estos resultados reflejan progresos hacia la transición financiera sostenibles, los países aún enfrentan retos estructurales significativos, entre ellos la diversificación económica, la ampliación de la inversión en sectores sostenibles y la reducción de la dependencia de industrias extractivas, factores que continúan limitando la consolidación de modelos financieros verdaderamente sostenibles en la región.

En el nivel “**Medio**” se encuentran Chile y Guatemala (2.2), así como Brasil y Uruguay (1.9). Chile registró un avance significativo, pasando de 1.7 a 2.2 puntos respecto a la edición anterior. Por el contrario, Guatemala experimentó un retroceso, disminuyendo de 2.6 a 2.2 puntos, después de haber sido el país con mejor desempeño en finanzas sostenibles en la edición pasada. Este descenso en Guatemala se explica principalmente por una reducción del financiamiento internacional destinado a los objetivos de biodiversidad y cambio climático, que pasó de 17.4% a 8.1%, y por un incremento en los ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono, que aumentaron del 4.0% al 6.0%.

Estos resultados evidencian la fragilidad de los avances cuando no están acompañados de cambios estructurales. Guatemala es un ejemplo de cómo la disminución del financiamiento externo, combinada con un repunte en actividades extractivas, puede revertir progresos en poco tiempo. En contraste, la mejora de Chile sugiere que las políticas fiscales internas pueden amortiguar estas fluctuaciones, aunque todavía muestran limitaciones para alcanzar niveles más altos de sostenibilidad.

En el nivel “**Medio Bajo**” se ubican Paraguay (1.7), Costa Rica (1.4), Bolivia, Ecuador y México (1.3). Entre ellos, Paraguay y Bolivia fueron los países que registraron los mayores avances. En el caso de Paraguay, la puntuación aumentó de 1.4 a 1.7 puntos, impulsada por un incremento en la asignación de recursos sostenibles. Bolivia, por su parte, pasó de 1.0 a 1.3 puntos, debido principalmente al aumento del financiamiento destinado a actividades climáticas, que creció del 11% al 27% del total recibido.

No obstante, estos avances no necesariamente muestran transformaciones estructurales en la gestión de las finanzas públicas. En el caso de Bolivia, el progreso se explica en gran medida por la entrada de financiamiento internacional, sin evidencia de una reorientación sustantiva de la política fiscal nacional.

Por otro lado, Ecuador y México mantienen valoraciones bajas, asociadas a una alta dependencia de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono, que representan más del 25% de sus ingresos totales. A ello se suma la ausencia de una estrategia integral que incorpore de manera explícita los criterios de sostenibilidad en la política fiscal y presupuestaria, lo que limita su avance hacia un modelo financiero alineado con los objetivos ambientales y climáticos.

Finalmente, en el nivel “**Bajo**” se encuentran Cuba y Trinidad y Tobago, ambos con una valoración de 1.0 puntos. En el caso de Trinidad y Tobago, la baja puntuación responde a su alta dependencia de los ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono, que representan casi el 15% del total. En Cuba, en cambio, la principal limitación fue la ausencia de información disponible para estimar de manera precisa las variables de ingresos y presupuestos intensivos en carbono.

Estos casos ilustran dos de los desafíos más críticos de la región: por un lado, la dificultad de países con economías fuertemente dependientes de sectores extractivos para transitar hacia un modelo sostenible; por otro, las limitaciones institucionales y de transparencia que impiden contar con información confiable y actualizada para evaluar el desempeño.

En conclusión, los resultados del IFS 2025 muestran avances puntuales en varios países, impulsados en algunos casos por el financiamiento internacional y en otros por esfuerzos nacionales de reasignación presupuestaria. No obstante, la región en su conjunto enfrenta desafíos estructurales: la dependencia de flujos externos, la persistencia de ingresos ligados a sectores intensivos en carbono y la débil capacidad institucional para orientar las finanzas hacia la sostenibilidad de manera consistente. Estos retos evidencian la distancia que aún separa a la región del cumplimiento del Artículo 2.1.c del Acuerdo de París, que llama a hacer coherentes los flujos financieros con una trayectoria hacia bajas emisiones de carbono y resilientes al clima.



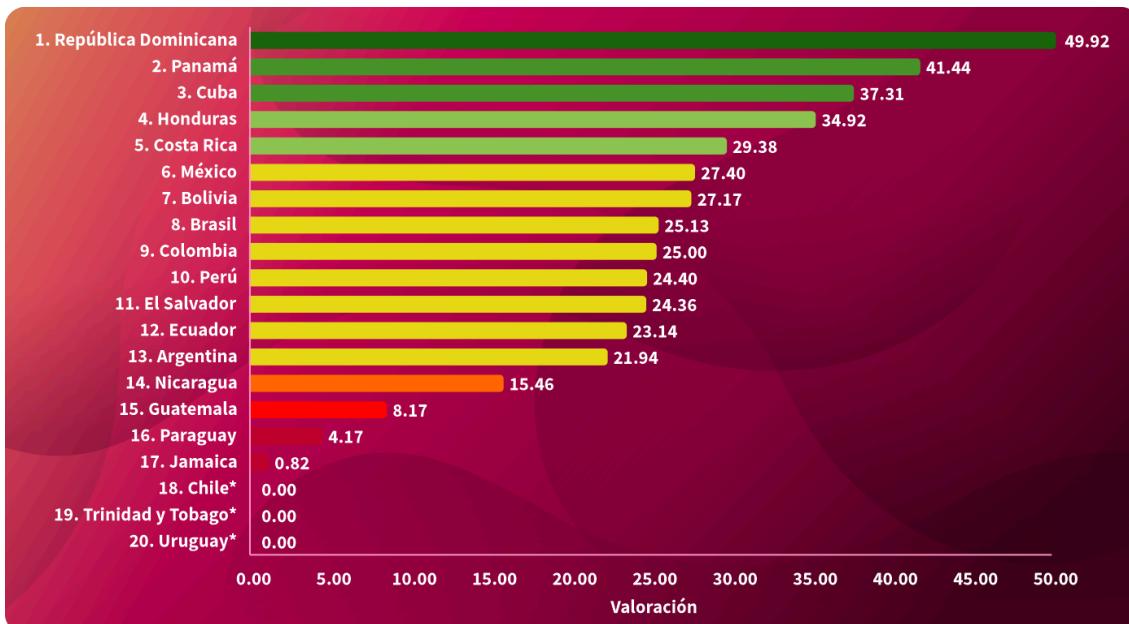
Ingresos Sostenibles

La variable de Ingresos Sostenibles (IS) mide el financiamiento para el desarrollo proveniente de fuentes bilaterales y multilaterales y otros flujos, destinados a la conservación de la biodiversidad y la acción climática. Su cálculo se realiza considerando el porcentaje que representa este financiamiento respecto al total de los recursos recibidos para el desarrollo.

Para esta edición, el cálculo de esta variable se actualizó con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), utilizando las bases de datos Credit Reporting System (CRS) y Climate-related Development Finance – Recipient Perspective (CRDF). Se dejó de emplear la información del Aid Atlas – que se basa en diversas bases de datos de la OCDE - debido a un rezago significativo de aproximadamente 3 años en la actualización de la información. A pesar de este cambio, se realizaron pruebas de consistencia para garantizar que la actualización no altere la información y permita la comparabilidad con años anteriores, incorporando así los datos más recientes disponibles, correspondientes a 2023.

Cabe señalar que para Chile, Trinidad y Tobago y Uruguay no se cuentan con registros como receptores de financiamiento en las bases consultadas. Sin embargo, esto no implica que estos países no reciban financiamiento destinado a la biodiversidad y cambio climático, sino que simplemente no están reflejados en estas fuentes de datos.

Gráfica 4. Ranking de Ingresos Sostenibles 2025 (% del total) datos a 2023



Fuente. Elaboración propia con base en datos de la OCDE, consultadas en 2025 y correspondientes al año 2023.

Los resultados para esta variable muestran que República Dominicana se posiciona como el principal receptor de financiamiento para biodiversidad y cambio climático, con un total de 1.4 mil millones de dólares, equivalentes al 49.92% de su financiamiento total para el desarrollo. Este desempeño ubica al país en un nivel “**Muy Alto**” de ingresos sostenibles.

En el nivel “**Alto**” de ingresos sostenibles se ubican Panamá y Cuba, que recibieron 1.2 mil millones de dólares (41.44%) y 82 millones de dólares (37.31%), respectivamente. Ambos países presentan una estructura de financiamiento orientado hacia sectores ambientales estratégicos. En el caso de Panamá, el volumen y la proporción del financiamiento muestran su capacidad en la incorporación de la sostenibilidad como un eje de política pública y de articular proyectos con impacto regional. Cuba, por su parte, muestra una eficiencia destacable en la canalización del financiamiento hacia programas de conservación, pese a las limitaciones estructurales que enfrenta. Estos casos sustentan que el acceso sostenido a financiamiento climático y para la biodiversidad es un factor decisivo para impulsar políticas ambientales consistentes, fortalecer la gobernanza climática y reducir la dependencia de actividades intensivas en carbono.

En el nivel “**Medio Alto**” se encuentran Honduras (34.92%) y Costa Rica (29.38%). El caso de Costa Rica resulta particularmente relevante, ya que pasó de 9.77% en la edición anterior a 29.38% en esta, mostrando un incremento sustancial en su capacidad para captar recursos vinculados a la sostenibilidad. Ambos países destacan por su orientación progresiva hacia el financiamiento climático, lo que ha permitido fortalecer programas de adaptación, reforestación y restauración de ecosistemas.

La mayoría de los países de estudio se concentran en el nivel “**Medio**” de ingresos sostenibles: México (27.40%), Bolivia (27.17%), Brasil (25.13%), Colombia (25.00%), Perú

(24.40%), El Salvador (24.36%), Ecuador (23.14%) y Argentina (21.94%). Aunque estos porcentajes indican que una parte considerable de su financiamiento se destina a sectores ambientales, resultan relativamente bajos en proporción a la relevancia ecológica y climática de sus territorios. Este aspecto es particularmente relevante para los países amazónicos – Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador – que albergan aproximadamente el 20% del agua dulce del planeta y el 25% de la flora y fauna mundial¹². De manera similar, México considerado un país megadiverso, concentra entre el 10% y 12% de las especies conocidas a nivel global¹³.

Esto sugiere la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para captar y gestionar financiamiento internacional, así como de diseñar mecanismos internos de financiamiento verde que permitan aprovechar su potencial de biodiversidad como activo estratégico para el desarrollo sostenible.

En el nivel “**Medio Bajo**” se encuentran Nicaragua (15.46%), mientras que en nivel “**Bajo**” se ubica Guatemala (8.17%), país que muestra una disminución considerable respecto a la edición anterior (17.49%). Finalmente, en el nivel “**Muy Bajo**” se encuentran Paraguay (4.17%) y Jamaica (0.82%), ambos países con caídas respecto a la edición previa. Esta tendencia resalta la persistencia de importantes desafíos vinculados principalmente a la debilidad institucional, la limitada planificación de proyectos y la falta de mecanismos nacionales de seguimiento y reporte de los flujos financieros ambientales.

En este contexto, la baja captación de recursos sostenibles no solo limita la capacidad de respuesta de los países ante los efectos del cambio climático, sino que también acentúa la dependencia de actividades económicas intensivas en carbono, perpetuando un modelo de desarrollo insostenible. La consolidación de esta variable resulta aún más relevante frente al Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificable de financiamiento climático acordado en la COP29 y cuya Ruta de Bakú a Belém, que busca movilizar al menos 1.3 billones de dólares hacia la COP30. Este nuevo marco global será fundamental para incrementar el financiamiento libre de deuda, ampliar el espacio fiscal de los países en desarrollo y acelerar la transformación de sus sistemas financieros en coherencia con los compromisos climáticos internacionales.



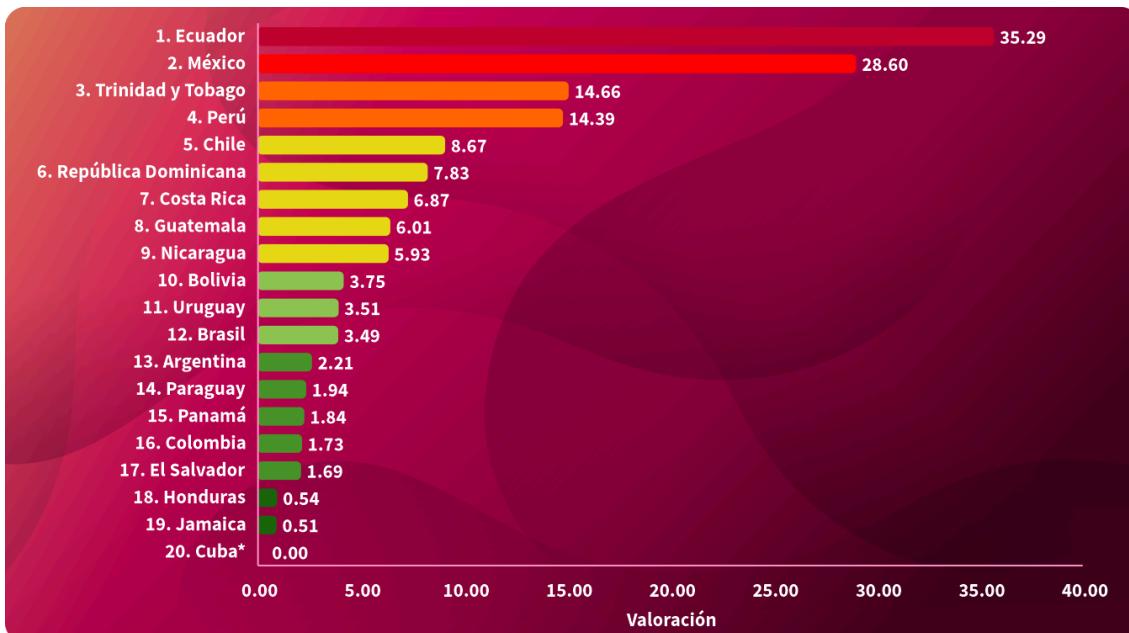
Ingresos Intensivos en Carbono

La variable Ingresos Intensivos en Carbono (IIC) mide la proporción de los recursos públicos que provienen de fuentes fiscales y no fiscales vinculadas a la producción, comercialización o exportación de combustibles fósiles, hidrocarburos y minerales. En términos metodológicos, el indicador se calcula como el porcentaje que estos ingresos representan respecto al total de recursos recaudados por cada país en 2024. La estimación se elaboró con base en información oficial disponible en leyes de ingresos, presupuestos nacionales y reportes fiscales. En el caso de Cuba, la ausencia de datos desagregados imposibilitó el cálculo de esta variable, lo que revela también las limitaciones de transparencia fiscal existentes en algunos contextos de la región.

¹² Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). “Amazonía”. Disponible en: [Amazonía](#)

¹³ Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). “*Programa Nacional de Restauración: Contexto*”. Disponible en: [Contexto | Biodiversidad Mexicana](#)

Gráfica 5. Ranking de Ingresos Intensivos en Carbono 2025 (% del total) datos a 2024



Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 analizados, correspondientes al año 2024.

Los resultados confirman que la dependencia de ingresos fósiles sigue siendo un rasgo estructural de varias economías de la región, condicionando su estabilidad presupuestaria y reduciendo su margen de maniobra para financiar la transición climática. Ecuador, con 35.29% es el país con la mayor proporción de ingresos intensivos en carbono, ubicándose en el nivel “**Muy Alto**”. Aunque la cifra representa una ligera disminución respecto a la edición anterior (37.08%), el país continúa mostrando una marcada vulnerabilidad fiscal y estructural, derivada de su alta dependencia en rentas extractivas. En términos absolutos, Ecuador generó alrededor de 16.2 mil millones de dólares provenientes de estas fuentes, lo que demuestra que los hidrocarburos siguen siendo un pilar central en sus finanzas públicas.

En el nivel “**Alto**” se encuentra México, con un 28.60% de ingresos intensivos en carbono, seguido por Trinidad y Tobago (14.66%) y Perú (14.39%), ambos en el nivel “**Medio Alto**”. En el caso mexicano, la proporción disminuyó respecto al 33.64% registrado en la edición anterior; sin embargo, el país continúa siendo una de las economías más dependientes de los ingresos petroleros de la región, especialmente por la relevancia de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en las finanzas públicas. La aparente reducción de la dependencia no refleja una reorientación estructural de las fuentes fiscales, sino más bien factores coyunturales, como la baja en los precios internacionales del crudo y la reducción en la producción nacional.

Por su parte, Trinidad y Tobago redujo su dependencia de los ingresos fósiles de 31.16% a 14.66% en un año, principalmente por la caída de los ingresos del gas y los hidrocarburos, que pasaron de 2.8 a 1.4 mil millones de dólares. Aunque esta disminución reduce nominalmente la exposición del país a los combustibles fósiles, también muestra su vulnerabilidad ante las fluctuaciones internacionales de precios.

En el nivel “**Medio**” se ubican Chile (8.67%), República Dominicana (7.83%), Costa Rica (6.87%), Guatemala (6.01%) y Nicaragua (5.93%). En el caso de Costa Rica y Guatemala, el incremento respecto a la edición anterior – de 4.66% a 6.87% y de 4.01% a 6.01%, respectivamente – resulta particularmente relevante. En ambos países, el aumento de ingresos asociados a combustibles fósiles o actividades extractivas revela una tensión estructural entre las metas climáticas y las necesidades fiscales. En este contexto, el riesgo no radica únicamente en el nivel absoluto de dependencia de estos ingresos, sino en la tendencia de crecimiento que presentan en comparación con los ingresos sostenibles.

En el nivel “**Medio Bajo**” incluye a Bolivia (3.75%), Uruguay (3.51%) y Brasil (3.49%), mientras en el nivel “**Bajo**” se encuentran Argentina (2.21%), Paraguay (1.94%), Panamá (1.84%), Colombia (1.73%) y El Salvador (1.69%). En este grupo destaca el caso de Colombia, que redujo su proporción de ingresos intensivos en carbono de 5.79% a 1.73%, una caída significativa que puede interpretarse de manera dual: por un lado, como una oportunidad para acelerar la descarbonización fiscal y reducir la dependencia del petróleo y el carbón; pero por otro, como una advertencia sobre la pérdida de ingresos fiscales estructurales que, si no son reemplazados por fuentes sostenibles, podría comprometer la estabilidad presupuestaria.

Finalmente, en el nivel “**Muy Bajo**” se ubican Honduras (0.54%) y Jamaica (0.51%). Estas economías muestran una baja dependencia de actividades extractivas, lo que constituye una ventaja estructural para la transición hacia modelos de desarrollo sostenible. Esta menor exposición a rentas fósiles les permite diseñar políticas fiscales verdes sin enfrentar la resistencia que suelen acompañar a la reducción de subsidios o gravámenes al carbono. No obstante, el reto para estos países consiste en aprovechar esta ventaja comparativa consolidando fuentes de ingreso estables, diversificadas y coherentes con sus estrategias nacionales de crecimiento ambiental y climático.

En conjunto, los resultados de esta variable presentan una marcada heterogeneidad estructural en la región. Mientras algunos países mantienen una fuerte dependencia de las rentas fósiles como principal fuente de financiamiento público, otros muestran avances graduales hacia estructuras fiscales más diversificadas y menos vulnerables. Esta variable constituye un componente clave para comprender las restricciones fiscales que enfrentan los países en la transición hacia economías bajas en carbono. La persistencia de altos niveles de ingresos asociados a la producción y comercialización de combustibles fósiles no solo retrasa la descarbonización económica, sino que también limita el margen fiscal necesario para impulsar políticas públicas sostenibles. En consecuencia, se reduce el espacio presupuestario destinado a la inversión ambiental, al tiempo que se dificulta el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático y desarrollo sostenible.

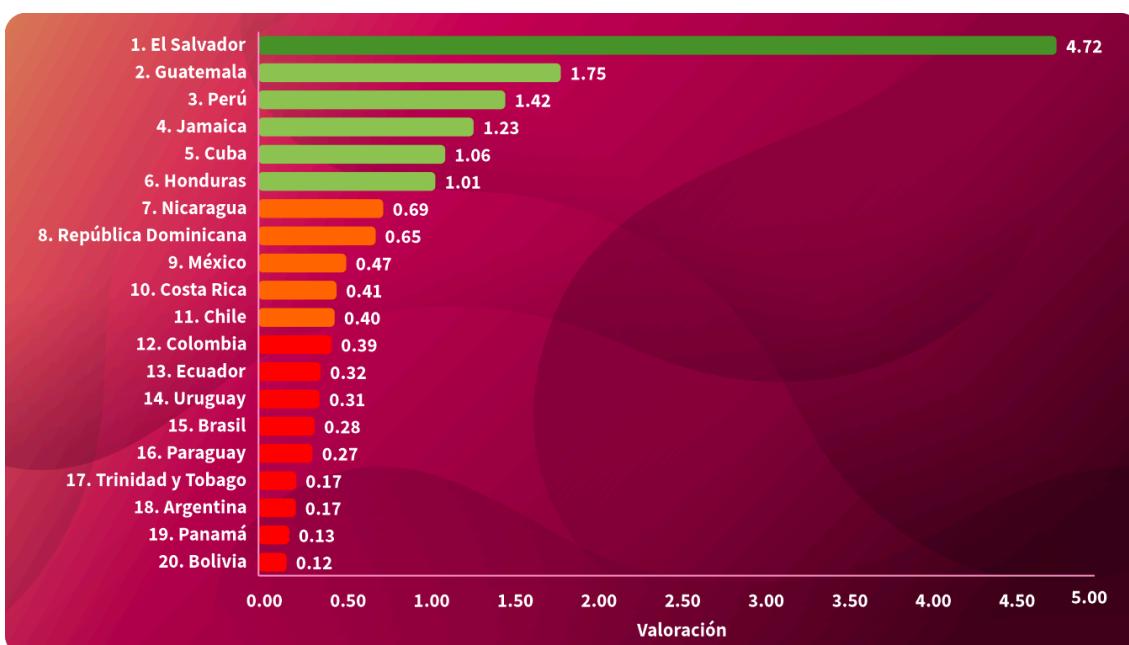
Presupuestos Sostenibles

La variable de Presupuestos Sostenibles (PS) mide el grado en que los países orientan su gasto público hacia sectores vinculados con la sostenibilidad ambiental, incluyendo biodiversidad, cambio climático, manejo forestal, eficiencia energética y atención a desastres naturales. En esta edición, la variable incorpora dos sectores adicionales – conservación de océanos y transporte sostenible – con el fin de capturar de forma más integral la alineación del gasto público con los compromisos ambientales y climáticos nacionales. El cálculo se

realiza con base en la proporción que presentan estos rubros dentro del presupuesto total de 2024, a partir de información oficial de las leyes presupuestales y reportes financieros gubernamentales.

Los resultados muestran una baja integración de la sostenibilidad en la estructura presupuestaria de los países de América Latina y el Caribe. En promedio, la región destina menos del 1% del gasto total a sectores sostenibles, lo que refleja una débil priorización ambiental dentro de la política fiscal. Este patrón persistente sugiere que, pese a los avances discursivos en torno a una transición baja en carbono, el financiamiento público continúa orientado hacia modelos de desarrollo intensivos en recursos naturales y con limitada capacidad para mitigar los riesgos climáticos.

Gráfica 6. Ranking de Presupuestos Sostenibles 2025 (% del total) datos a 2024



Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 analizados, correspondientes al año 2024.

El caso de El Salvador sobresale al destinar cerca del 5% de su presupuesto a sectores sostenibles, lo que lo ubica en el nivel “**Alto**”. Este incremento con respecto a la edición anterior de (3.16% a 4.72%) denota un esfuerzo institucional por incorporar la sostenibilidad en la planificación presupuestaria. Sin embargo, incluso esta proporción resulta modesta frente a las necesidades de inversión que exige la adaptación climática y la protección de ecosistemas estratégicos.

En el nivel “**Medio Alto**” se ubican Guatemala (1.75%), Perú (1.42%), Jamaica (1.23%), Cuba (1.06%), y Honduras (1.01%). Estos países, junto con El Salvador, son los únicos que superan el 1.0% del gasto total en sectores sostenibles. En particular, el incremento de Honduras de 0.27% a 1.01%, respecto a la edición previa refleja un intento de reorientación presupuestaria; no obstante, la magnitud del cambio sigue siendo insuficiente y evidencia la dependencia estructural de los presupuestos nacionales respecto a los rubros tradicionales, como el gasto corriente y los sectores extractivos. La capacidad institucional limitada para

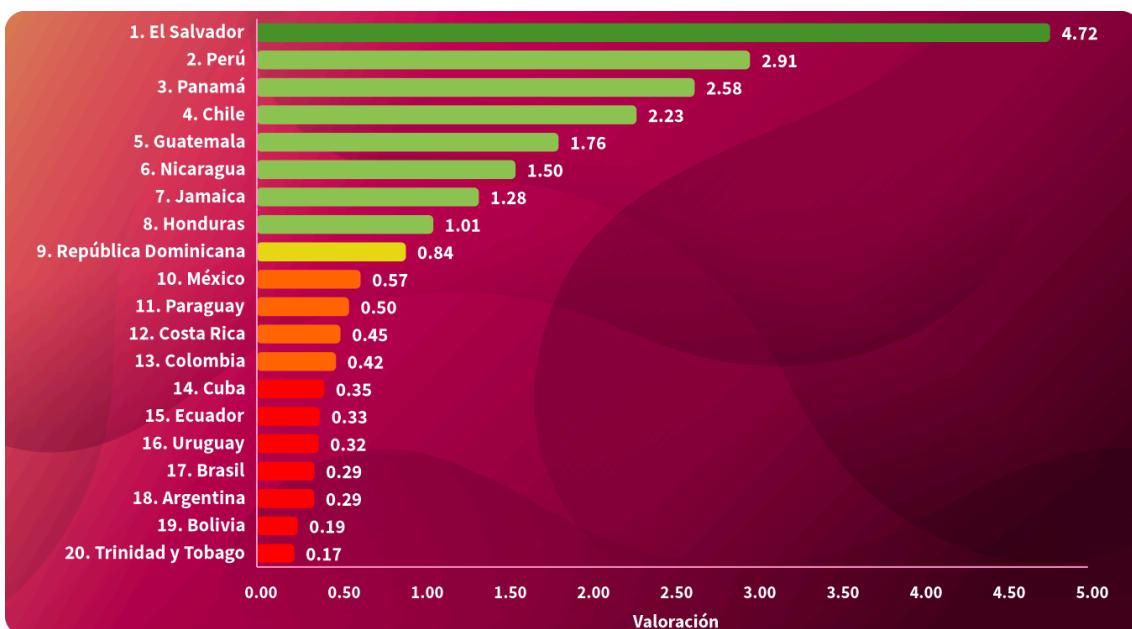
integrar criterios de sostenibilidad en la gestión presupuestaria continúa siendo un desafío transversal en la región.

En el nivel “**Medio Bajo**”, que agrupa a Nicaragua (0.69%), República Dominicana (0.65%), México (0.47%), Costa Rica (0.41%) y Chile (0.40%). El caso de México resulta particularmente relevante por su contradicción estructural: a pesar de su alta biodiversidad y de su papel activo en los compromisos climáticos internacionales, su gasto en sectores sostenibles es marginal. Esta brecha entre el potencial ambiental y asignación fiscal sugiere una desconexión entre la política ambiental y la planificación presupuestaria.

La mayoría de los países analizados se concentran en los niveles “**Bajo**”, entre ellos Colombia (0.39%), Ecuador (0.32%), Uruguay (0.31%), Brasil (0.28%), Paraguay (0.27%), Trinidad y Tobago (0.17%), Argentina (0.17%), Panamá (0.13%) y Bolivia (0.12%). Estos países destinan menos del 0.5% del presupuesto a sectores sostenibles. La situación de los países amazónicos – Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador – resulta especialmente crítica, dada su relevancia en la regulación climática global. La insuficiente asignación de recursos hacia la sostenibilidad en estos países presenta una asimetría entre la importancia ambiental del territorio y las prioridades fiscales nacionales, lo que podría profundizar vulnerabilidades frente a crisis climática y la pérdida de capital natural.

La incorporación de los nuevos sectores – conservación de océanos y transporte sostenible – amplía el alcance temático de la medición de los Presupuestos Sostenibles, permitiendo una evaluación más integral de los esfuerzos fiscales vinculados a la sostenibilidad ambiental. No obstante, los resultados muestran que las variaciones derivadas de esta ampliación son marginales y no alteran de manera sustancial las tendencias estructurales observadas en ediciones anteriores del índice para esta variable. En otras palabras, la inclusión de estos sectores mejora la precisión metodológica y la representatividad temática del indicador, pero no implica un cambio real en la orientación de los presupuestos nacionales hacia la sostenibilidad.

Gráfica 7. Ranking de Presupuestos Sostenibles 2025, considerando los nuevos sectores de conservación de océanos y transporte sostenible (% del total) datos a 2024



Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 analizados, correspondientes al año 2024.

El Salvador mantiene la mayor asignación (4.72%) del gasto total a sectores sostenibles, ubicándose en el nivel “**Alto**” del indicador y consolidando su posición como el país con mayor alineación fiscal hacia la sostenibilidad. Le siguen Perú (2.91%), Panamá (2.58%) y Chile (2.23%), Guatemala (1.76%), Nicaragua (1.50%), Jamaica (1.28%) y Honduras (1.01%), todos en el nivel “**Medio Alto**”. No obstante, los incrementos registrados en casos como Panamá y Chile responden principalmente, a la inclusión de estos sectores y no a un fortalecimiento estructural de las asignaciones sostenibles. En este sentido, los aumentos reflejan ajustes metodológicos más que transformaciones institucionales. La ampliación del marco analítico permite contabilizar un espectro más amplio del gasto, pero no necesariamente evidencia un compromiso fiscal más robusto o sostenido con la sostenibilidad ambiental.

En el nivel “**Medio**” se ubica República Dominicana (0.84%), país que, pese a mostrar un ligero incremento respecto a la edición previa, mantiene una asignación aún limitada. En el nivel “**Medio Bajo**” se encuentran México (0.57%), Paraguay (0.50%), Costa Rica (0.45%) y Colombia (0.42%), cuyos porcentajes muestran la persistencia de una baja priorización del gasto sostenible dentro de las estructuras presupuestarias. El caso de México y Colombia es particularmente llamativo, a pesar de ser países con una mayor biodiversidad y de contar con un marco institucional relativamente sólido en materia ambiental, sus gastos en sectores sostenibles continúan siendo marginales. Esta desconexión entre potencial ambiental, compromisos internacionales y asignación fiscal refleja una falla estructural en la integración de la sostenibilidad en la política presupuestaria y limita la capacidad del país para cumplir de manera efectiva con sus metas de mitigación y adaptación climática.

En el nivel “**Bajo**”, que agrupa la mayoría de los países, se ubican Cuba (0.35%), Ecuador (0.33%), Uruguay (0.32%), Brasil (0.29%), Argentina (0.29%), Bolivia (0.19%) y Trinidad y Tobago (0.17%), las asignaciones resultan mínimas, incluso en comparación con el tamaño de sus economías o con su relevancia ambiental a nivel global. Este rezago es particularmente preocupante en los países amazónicos, como Brasil, Colombia y Ecuador, dado su papel central en la regulación climática y en la conservación de la biodiversidad. La baja asignación de recursos a estos sectores sostenibles evidencian una desalineación crítica entre las funciones ecosistémicas que estos territorios cumplen y la atención que reciben en la política fiscal. De mantenerse esta tendencia, la región podría enfrentar mayores vulnerabilidades frente a los impactos del cambio climático y una creciente pérdida de capital natural, con consecuencias socioeconómicas a largo plazo.

En términos comparativos, la evaluación de los escenarios con y sin la incorporación de los nuevos sectores confirman que el gasto público destinado a la sostenibilidad permanece insuficiente, marginal y reactivo. La ampliación metodológica mejora la capacidad de medición del indicador y permite capturar nuevas áreas de acción presupuestal, pero no modifica la conclusión de fondo: la sostenibilidad aún no constituye un eje estructural de la política fiscal en América Latina y el Caribe. En la mayoría de los casos, las asignaciones hacia sectores sostenibles dependen de la disponibilidad de recursos externos, lo que limita la autonomía fiscal de los países para sostener estos esfuerzos en el tiempo.

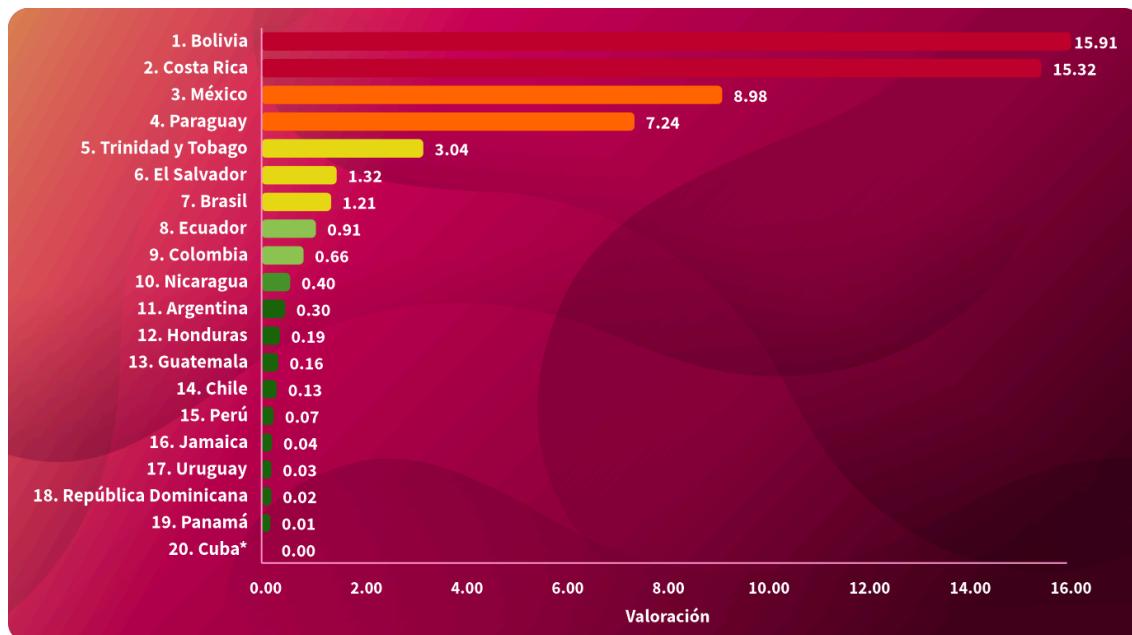
En síntesis, el análisis de los Presupuestos Sostenibles en la región vislumbra una brecha persistente entre los compromisos ambientales y la acción fiscal efectiva. La escasa asignación presupuestaria, incluso entre los países con alto potencial ambiental o vulnerabilidad climática, demuestra que la sostenibilidad sigue siendo concebida como una prioridad secundaria dentro de la política económica. Superar esta brecha exige integrar de manera transversal los criterios de sostenibilidad en la planificación presupuestaria, fortalecer los marcos normativos y metodológicos para la clasificación del gasto sostenible e institucionalizar mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto ambiental en el presupuesto público. Solo mediante una transformación estructural de los sistemas fiscales será posible avanzar hacia una política presupuestaria coherente con los compromisos climáticos asumidos a nivel global.



Presupuestos Intensivos en Carbono

La variable de Presupuestos Intensivos en Carbono (PIC) evalúa la proporción del gasto público que los gobiernos destinan a actividades con alto impacto en la generación de gases contaminantes. Esto incluye el financiamiento de la explotación, exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, así como los recursos asignados a empresas estatales vinculadas a la producción y comercialización de petróleo, gas o carbón. La estimación se realizó a partir del porcentaje que dichos rubros representan del presupuesto total aprobado para 2024, utilizando información oficial proveniente principalmente de las leyes de presupuesto nacionales, los reportes de ejecución financiera y los informes del sector energético. En el caso de Cuba, la ausencia de información desagregada impidió la estimación de la variable.

Gráfica 8. Ranking de Presupuestos Intensivos en Carbono 2025 (% del total) datos a 2024



Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 analizados, correspondientes al año 2024.

Los resultados muestran que Bolivia (15.91%) y Costa Rica (15.32%) son los países con la mayor proporción del gasto público orientado a actividades intensivas en carbono, ubicándose ambos en el nivel “**Muy Alto**”. En términos absolutos, Bolivia destinó alrededor de 7.8 mil millones de dólares, mientras que Costa Rica asignó 3.7 mil millones, cifras ligeramente menores a las reportadas en la edición anterior (17.83% y 16.58%, respectivamente). Aún con esta disminución, los niveles observados continúan revelando una dependencia estructural del gasto público respecto a sectores emisores. Este patrón de asignación reproduce modelos de desarrollo basados en la extracción de recursos fósiles, restringe el avance hacia una matriz productiva baja en carbono y limita la coherencia entre la política fiscal y los compromisos internacionales de mitigación.

En el nivel “**Medio Alto**”, se ubican México (8.98%) y Paraguay (7.24%). En el caso de México, si bien se observa una leve reducción respecto a la edición anterior (de 10.65% a 8.98%), el país continúa mostrando una alta concentración presupuestaria en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y en programas asociados al sector de hidrocarburos. Esta orientación refuerza un patrón de gasto anclado en una matriz energética dependiente del petróleo, lo que contradice los objetivos de descarbonización y dificulta la transición hacia fuentes sostenibles. La ausencia de una estrategia clara de reorientación del gasto hacia energías renovables, eficiencia energética o movilidad sostenible ilustra una brecha entre el discurso climático y la acción presupuestaria efectiva.

El nivel “**Medio**” agrupa a Trinidad y Tobago (3.04%), El Salvador (1.32%) y Brasil (1.21%). En el caso de Trinidad y Tobago, pese a su histórica dependencia del sector energético, se observa una tendencia gradual a la baja, aunque el gasto destinado a hidrocarburos sigue siendo significativo. Brasil, por su parte, mantiene una asignación moderada, pero

concentrada en infraestructura y subsidios relacionados con la explotación de recursos naturales.

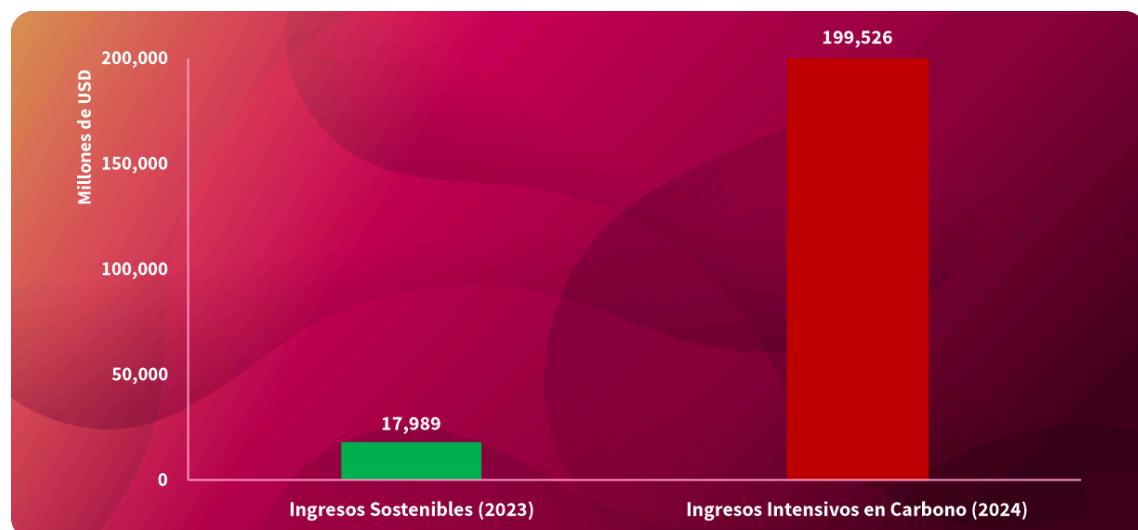
En el nivel “**Medio Bajo**”, se ubican Ecuador (0.91%) y Colombia (0.66%), países con economías tradicionalmente dependientes del petróleo. Si bien estos resultados podrían interpretarse como un menor grado de dependencia fiscal respecto a los sectores fósiles, la baja proporción muestra restricciones fiscales o limitaciones de inversión pública, más que una decisión deliberada de descarbonización.

En el nivel “**Bajo**” se encuentra Nicaragua (0.40%), y en el “**Muy Bajo**” destacan Argentina (0.30%), Honduras (0.19%), Guatemala (0.16%), Chile (0.13%), Perú (0.07%), Jamaica (0.04%), Uruguay (0.03%), República Dominicana (0.02%) y Panamá (0.01%). Aunque sus proporciones son menores en comparación con años anteriores, este resultado puede subestimar el gasto indirecto destinado a infraestructura, subsidios o incentivos fiscales que mantienen operativas las cadenas extractivas.

Ingresos Sostenibles versus Ingresos Intensivos en Carbono

El análisis comparativo entre los Ingresos Sostenibles (con datos a 2023) y los Ingresos Intensivos en Carbono (con datos a 2024) evidencia la persistencia de una dependencia estructural de las economías de América Latina y el Caribe respecto a los ingresos provenientes de actividades vinculadas a los combustibles fósiles. En conjunto, los 20 países analizados generaron aproximadamente 199.5 mil millones de dólares por concepto de extracción, exportación y comercialización de combustibles, hidrocarburos y minerales, mientras que los ingresos sostenibles alcanzaron apenas 17.9 mil millones de dólares. Esto implica que los ingresos intensivos en carbono fueron 11 veces superiores a los sostenibles.

Gráfica 9. Análisis regional: Ingresos Sostenibles (2023) versus Ingresos Intensivos en Carbono (2024).



Fuente. Elaboración propia con base en datos de la OCDE correspondientes al año 2023 y en documentos fiscales de los 20 países analizados correspondientes al año 2024.

Si bien esta relación representa una mejoría respecto a la edición anterior – cuando los ingresos intensivos en carbono superaron en 19 veces a los sostenibles – el cambio no refleja

un avance real en la estructura económica de los países, sino que responde principalmente a ajustes en el año base utilizado para el cálculo, ya que en esta edición se incorporó información más actualizada, correspondiente a 2023. En consecuencia, la región continúa enfrentando el desafío de reducir su dependencia fiscal de sectores extractivos y fortalecer la generación de ingresos alineados con la sostenibilidad y la acción climática.

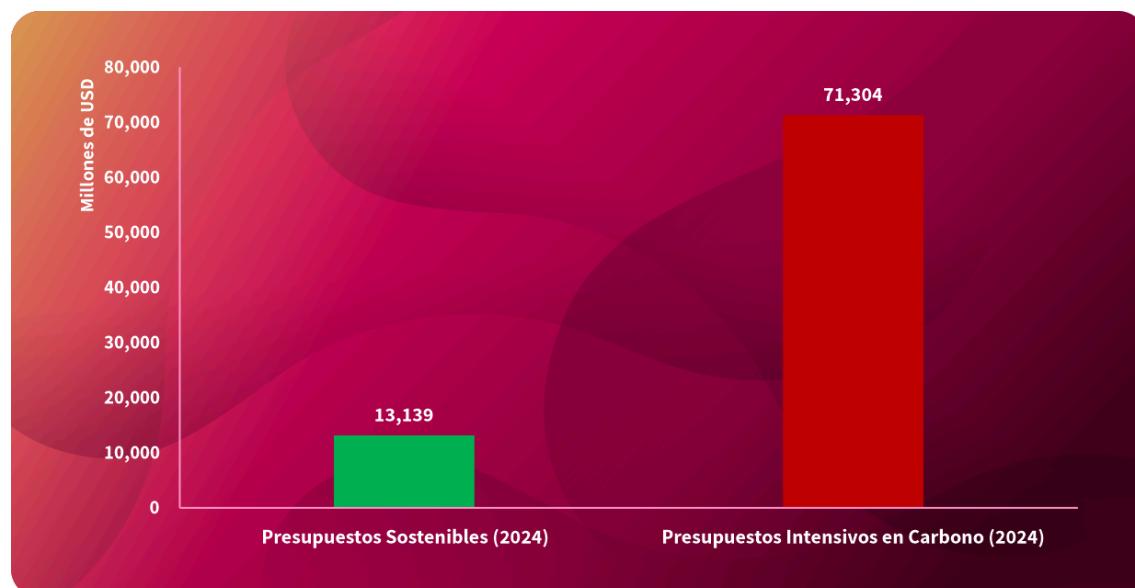
Esta brecha muestra una clara asimetría estructural en la arquitectura fiscal y económica regional, donde la renta derivada de la explotación de recursos naturales continúa siendo el principal sostén de las finanzas públicas. Tal configuración económica no sólo amplifica la vulnerabilidad fiscal, sino también reproduce patrones de desarrollo incompatibles con las metas de descarbonización y transición justa definidas en los compromisos climáticos.

Además, el rezago de los ingresos sostenibles también muestra la limitada capacidad de los países para movilizar estos recursos, ya sea mediante mecanismos de financiamiento climático, incentivos fiscales o alianzas público-privadas orientadas a la sostenibilidad. En la mayoría de los casos, los flujos sostenibles dependen de la cooperación internacional o de iniciativas puntuales, sin consolidarse como fuentes estables de ingreso público. Por el contrario, las rentas fósiles continúan recibiendo apoyo institucional, generando un efecto de bloqueo estructural que perpetúa en la asignación de incentivos fiscales a sectores emisores y desincentiva la innovación verde y la diversificación económica.

Presupuestos Sostenibles versus Presupuestos Intensivos en Carbono

El análisis comparativo entre los Presupuestos Sostenibles y los Presupuestos Intensivos en Carbono, con datos correspondientes a 2024, muestra un patrón de asignación del gasto público que refuerza las tendencias observadas en la estructura de ingresos. En promedio, los países de la región destinaron 71.3 mil millones de dólares a sectores intensivos en carbono, mientras que las asignaciones a programas o actividades con orientación sostenible ascendieron a 13.1 mil millones de dólares.

Gráfica 10. Análisis comparativo: Presupuestos Sostenibles versus Presupuestos Intensivos en Carbono en 2024



Fuente: Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 analizados, correspondientes al año 2024.

En términos proporcionales, el gasto en actividades intensivas en carbono fue 5 veces superior al destinado a iniciativas sostenibles. Si bien esta relación presenta una mejoría con respecto a la edición anterior – cuando el gasto intensivo en carbono fue de 12 veces mayor – la reducción de la brecha responde, en parte a una posible reorientación del gasto público, aunque se explica principalmente por los ajustes metodológicos incorporados en esta edición del índice.

Este resultado refleja una incongruencia estructural entre los objetivos climáticos declarados y la práctica presupuestaria. Aunque varios países han incorporado metas de sostenibilidad en sus planes nacionales de desarrollo o estrategias de finanzas sostenibles, la ejecución presupuestaria sigue priorizando sectores con alto impacto ambiental, como la exploración y refinación de hidrocarburos, la expansión de infraestructura fósil y los subsidios a combustibles. En la práctica, esta orientación del gasto compromete la coherencia de las políticas climáticas nacionales, desvía recursos que podrían destinarse a la transición energética y limita la capacidad para impulsar proyectos de adaptación o conservación de ecosistemas estratégicos.

La persistencia de un gasto público intensivo en carbono evidencia una desconexión entre la planificación fiscal y los compromisos climáticos asumidos por los países de la región. Avanzar hacia presupuestos compatibles con los objetivos climáticos exige la implementación de reformas profundas en la estructura del gasto público, la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles, y la integración sistemática de criterios de sostenibilidad, riesgo climático y co-beneficios ambientales en los procesos de planificación, programación y ejecución presupuestaria.

Solo mediante una reorientación decidida de los recursos públicos hacia sectores sostenibles será posible consolidar una gestión fiscal como motor de un desarrollo bajo en carbono, fortaleciendo al mismo tiempo la resiliencia económica, social y ambiental de América Latina y el Caribe.

Conclusiones

El análisis integral del **Índice de Finanzas Sostenibles (IFS)** muestra que, a pesar de los avances metodológicos y de disponibilidad de información alcanzados, los países de América Latina y el Caribe mantienen una brecha estructural entre la sostenibilidad declarada y la sostenibilidad efectivamente financiada. Las finanzas públicas de la región continúan orientadas, en gran medida, hacia actividades intensivas en carbono, mientras que los flujos destinados a sectores sostenibles permanecen en niveles marginales, dispersos y de alcance limitado.

A nivel regional, los **ingresos intensivos en carbono superan en 11 veces a los ingresos sostenibles**, lo que confirma la dependencia estructural de las economías de la región respecto a la explotación y comercialización de combustibles fósiles. Este patrón refleja la persistencia de un modelo extractivo que prioriza la estabilidad fiscal de corto plazo sobre la coherencia climática y la sostenibilidad de largo plazo. La limitada capacidad para generar ingresos sostenibles o movilizar financiamiento climático muestra la ausencia de instrumentos fiscales robustos que permitan sustituir progresivamente las rentas fósiles por fuentes sostenibles y resilientes de ingreso público.

Además, el análisis refleja que los ingresos provienen principalmente de préstamos, sin variaciones significativas a través de los años. En este sentido, el **92.1%** del financiamiento en la región corresponde a **préstamos**, mientras que solo el restante **7.9%** proviene de **subvenciones**.

En materia de gasto, el panorama resulta igualmente desafiante. Los presupuestos sostenibles representan aún una fracción reducida del gasto total – en la mayoría de los países, inferior al 3% - mientras que las asignaciones intensivas en carbono conservan un peso preponderante, especialmente a través de subsidios energéticos y del financiamiento de empresas nacionales del sector hidrocarburos. En promedio los **presupuestos intensivos en carbono superan en 5 veces a los sostenibles**, lo que muestra una desconexión entre la planificación fiscal, la política ambiental y los compromisos climáticos.

En conjunto, los resultados del IFS resaltan la necesidad de **redefinir la arquitectura fiscal y financiera de la región**. La transición hacia economías bajas en carbono requiere políticas fiscales transformadoras orientadas a la eliminación gradual de los subsidios fósiles, la movilización de ingresos sostenibles y la planificación presupuestaria transparente y coherente.

Este desafío se vincula directamente con el mandato del **Artículo 2.1.c del Acuerdo de París**. Cumplir con este principio implica reorientar tanto el gasto como los ingresos públicos hacia la sostenibilidad, fortaleciendo la capacidad institucional y fiscal de los países para financiar una transición justa.

El fortalecimiento de los marcos nacionales de finanzas sostenibles, junto con la consolidación de instrumentos de seguimiento y medición como el IFS, constituye un paso fundamental para reorientar los **flujos financieros hacia la sostenibilidad**, contribuyendo así la construcción de una región más resiliente equitativa y climáticamente responsable.



ifs25
Índice
de Finanzas
Sostenibles 2025
(datos a 2024)



GRUPO DE
FINANCIAMIENTO
CLIMÁTICO
LAC